



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS

Bogotá D.C.,

Doctora

AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO

Secretaria

Comisión Primera

Cámara de Representantes

debatescomisionprimera@camara.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición No. 30

Referencia: Radicado 2024-1-004044-035051

Id: 328793

Respetada Secretaria,

En atención a la Proposición presentada por el Honorable Representante Carlos Felipe Quintero Ovalle, mediante la cual se cita a debate de Control Político sobre *“La difícil situación de orden público en los territorios y el estado de avance de los procesos de acercamiento, negociación o sometimiento con los diversos grupos al margen de la ley”*, me permito, de conformidad con las competencias del Ministerio del Interior y de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno; Dirección de Derechos Humanos; Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial y Lucha contra la Trata; Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana; y la Oficina Asesora de Planeación, dar respuesta a al cuestionario allegado, en los siguientes términos:

1- Teniendo en cuenta que esta cartera es la responsable de la seguridad y convivencia ciudadana, sírvase de informar:

Resulta necesario aclarar que una de las misiones del Ministerio del Interior es la de *“Liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar la gestión política del Gobierno, la protección, el goce efectivo de los derechos y las libertades de los ciudadanos, fortaleciendo el diálogo social e intercultural Estado – Comunidades, la democracia, la participación, la seguridad y la convivencia ciudadana, promoviendo así el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables en el marco de la legalidad, el emprendimiento y la equidad.”*

Sumado a lo anterior, se destaca que la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2893 de 2011, modificado por el artículo 4 del Decreto 1152 de 2022, tiene como funciones:

[...] Son funciones de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno las siguientes: 1. Apoyar en coordinación con las entidades competentes la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas para el orden público interno y para prevenir, atender y controlar situaciones de riesgo que vulneren o amenacen a la población, en coordinación especial con las autoridades civiles y la Fuerza Pública. 2. Apoyar al Ministro del Interior en la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional en



coordinación con el Ministro de Defensa Nacional, para lo cual podrá coordinar con los gobernadores y alcaldes, las políticas, planes operativos y demás acciones necesarias para dicho fin, de conformidad con la ley. 3. Coordinar con la Dirección de Derechos Humanos la atención a las denuncias sobre inminentes riesgos de violaciones o amenazas a los Derechos Humanos y dar curso a las mismas directamente o ante las autoridades competentes. 4. Promover la incorporación del componente de orden público y convivencia ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin de fortalecer la política pública en esta materia y generar condiciones sostenibles de gobernabilidad. 5. Apoyar y hacer seguimiento a gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de restablecimiento y preservación del orden público y la convivencia ciudadana. 6. Diseñar políticas, planes y estrategias para la conservación del orden público en el territorio nacional, así como para entablar el diálogo con las comunidades y los diferentes sectores que se encuentren afectados por alteraciones del mismo 7. Fortalecer los mecanismos y espacios de interlocución, entre el nivel nacional y territorial para atender las problemáticas relacionadas con el orden público y social. “(…)” 9. Apoyar la implementación y seguimiento a las estrategias de control policial en las entidades territoriales en coordinación con el Ministerio de Defensa. “(…)” 12. Promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios seccionales y locales en materia de atención a la población víctima de la violencia y la política pública correspondiente. [...] (Subrayado fuera del texto)

De esta manera, con relación a la responsabilidad de la seguridad y convivencia ciudadana, se precisa que no son de competencia exclusiva de este Ministerio. Lo anterior, teniendo en cuenta que al Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, le corresponde, entre otras funciones, articular institucionalmente, acciones con el Ministerio de Defensa, en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas de convivencia; estrategias de seguridad humana y promover la incorporación del componente de orden público y convivencia ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin de fortalecer la política pública en esta materia y generar condiciones sostenibles de gobernabilidad.

Consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de dar respuesta a la pregunta, desde este Ministerio se realizó traslado por competencia del interrogante al Ministerio de Defensa Nacional, a través de oficio con Radicado No. 2024-2-003201-031504, para que se brinde respuesta de fondo.

No obstante lo anterior, este Ministerio, de acuerdo a sus funciones legales y constitucionales, procede a responder a las preguntas contenidas en el interrogante No. 1 del cuestionario de la proposición.

¿Cuál es la política pública que está ejecutando este Gobierno? Sírvase de explicar los componentes, enfoques y acciones.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, resulta relevante señalar que la política pública en materia de seguridad y convivencia ciudadana tiene por finalidad terminar los conflictos armados y, asimismo, promover, a través de las herramientas con la que cuenta el gobierno nacional, la reconciliación social. De esta manera, esta política pública debe ser inclusiva y equitativa y, a la vez, garantizar el acceso a las oportunidades sociales, económicas y educativas para la sociedad, en especial para aquellos que han sufrido la marginación histórica y que han sido afectados por el conflicto armado.



De igual forma, la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el 2016, es un hito trascendental en la historia de la Nación que simboliza un compromiso histórico para poner fin a décadas de conflicto armado y avanzar hacia la edificación de una paz estable y duradera, lo cual plantea un compromiso colectivo de la sociedad colombiana para superar las divisiones y forjar un porvenir fundamentado en la reconciliación, la justicia y la convivencia pacífica.

A partir de la necesidad de avanzar en la consolidación de una sociedad en paz se expidió la Ley 2272 de 2022^[1], ley de Paz Total, la cual tiene como punto de partida la necesidad de abordar las causas fundamentales del conflicto armado y promover una reconciliación en la sociedad. Este marco legal se apoya en la implementación de políticas públicas que sean inclusivas y equitativas, garantizando el acceso a oportunidades económicas, sociales y educativas para todas las comunidades, especialmente aquellas que han sufrido marginación histórica y han sido afectadas por el conflicto.

El enfoque de la Ley 2272 de 2022 se centra en la transformación de las dinámicas de violencia mediante el fomento del diálogo, la implementación de mecanismos de justicia transicional y la promoción de la participación ciudadana, con el propósito de cultivar una cultura de paz arraigada al respeto a los derechos humanos y la diversidad.

En el cumplimiento de este propósito, la Ley 2272 de 2022 reconoce la seguridad humana y la justicia social como un eje de transformación que coadyuvará a la consecución de la Paz Total. Según la norma en cita, la política de paz:

“[...] será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, interacción y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Además de lo anterior, como instrumento de política y gestión pública, la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 *Colombia Potencia Mundial de la Vida*, se compromete en consolidar la protección de la vida como un propósito nacional, lo cual se hará a partir de la construcción de un nuevo contrato social, bajo una cultura de la paz que reconozca el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantice el cuidado propio, mutuo y de la casa común.

En este contexto, se plantea la Política Pública de Convivencia y Seguridad para la Vida, como un documento orientador que se encuentra en formulación para el logro del desarrollo de capacidades individuales, colectivas e institucionales para la gestión de conflictividades y la promoción de la convivencia y la seguridad para todos los ciudadanos, a través de la construcción de una cultura de paz y seguridad humana que garantice el respeto por los derechos humanos, la inclusión social, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la construcción e implementación efectiva de acuerdos ciudadanos.

En este sentido, la Política Pública de Convivencia y Seguridad para la Vida se ha construido de manera conjunta a partir de procesos de diálogo territorial, comunitario e institucional y plantea su implementación, a partir de la promoción y facilitación de procesos locales y regionales que incluya diversos actores y entidades en el nivel nacional y territorial, el desarrollo cotidiano de capacidades orientadas a la acción corresponsable de la ciudadanía y la efectividad de la acción pública, lo cual garantice una política pública incluyente en beneficios y responsabilidades.



Ahora bien, respecto a la política pública, es importante destacar que, durante el proceso de consulta ciudadana, se debatió y conceptualizó colectivamente acerca de los alcances y objetivos de una Política Pública de Convivencia y Seguridad para la Vida. Se presentaron las siguientes aproximaciones que, en términos generales, reconocen conceptualmente los alcances de la política de la siguiente manera:

- Instrumento de gestión pública liderado por el Ministerio del Interior enfocado en el desarrollo de capacidades institucionales y ciudadanas para abordar la convivencia y la seguridad a nivel territorial. Su enfoque conceptual y metodológico busca fijar los lineamientos técnicos requeridos para la implementación coordinada y articulada de las herramientas con las que se cuentan en el nivel nacional y territorial para prevenir la conflictividad, promover la convivencia y consolidar la Seguridad Humana en el territorio nacional.
- Escenario institucional de construcción de acuerdos entre entidades públicas de diferentes niveles de gestión territorial con sectores ciudadanos diversos, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, y orientado a la construcción de una cultura del cuidado propio, de los otros y del entorno, basada en la acción institucional, comunitaria y personal.
- Oportunidad para fortalecer habilidades y capacidades, establecer mecanismos y espacios autónomos para la resolución de diferencias, utilizando tanto los mecanismos legales como los comunitarios establecidos, teniendo en cuenta las tradiciones y la cultura propia de las comunidades. Este concepto promueve un sentido de corresponsabilidad en la adquisición de aptitudes para abordar de forma pacífica las conflictividades, generando experiencias y aprendizajes tanto en la comunidad y en cada uno de sus miembros como individuos.
- Estrategia armonizada con instrumentos de gestión pública territorial, como es el caso de los Planes Integrales de Seguridad Ciudadana y Convivencia (PISCC), con el fin de orientar y promover el desarrollo de capacidades para abordar de manera armónica los conflictos, contribuyendo a la observación y prevención de actos violentos que vulneran o limitan el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.
- Visor de los efectos de las tensiones cotidianas, en la seguridad y convivencia ciudadana, ampliando su reflexión al desarrollo creativo y colaborativo de instrumentos de formación pedagógica y lúdica, existentes y el diseño de nuevas herramientas que faciliten el abordaje y resolución de conflictos de forma preventiva, contribuyendo a la garantía en el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas.

Dentro de los objetivos de la política pública, es importante señalar además que, esta articula estrategias integrales y coordinadas a partir de las cuales se promueve la formación de comunidades resilientes, permitiendo fortalecer las habilidades tanto individuales como colectivas e institucionales para abordar de manera preventiva conductas que afectan la convivencia y la seguridad humana en todo el territorio nacional. Es así que se plantea como objetivo general: Fortalecer el desarrollo de capacidades individuales, colectivas e institucionales para la gestión de conflictividades y la promoción de la convivencia ciudadana en el marco de la Seguridad Humana.

Para el logro de este objetivo, se plantea un modelo de gestión de la política, estructurado a partir de cinco (5) dimensiones a través de las cuales se propone un objetivo específico. Las dimensiones son grandes enfoques desde los cuales se gestionan acciones y procesos.

Es así como esta política pública está conformada por cinco dimensiones, a saber, i) Gestión del conocimiento y saberes para la convivencia pacífica; ii) Gestión territorial de la convivencia y la



seguridad; iii) Cultura de la convivencia e instrumentos para el manejo pacífico de las controversias; iv) Diálogo social para la transformación de conflictos; y v) Convivencia comunitaria sostenible. A continuación, se profundiza sobre las dimensiones:

1. Gestión del conocimiento y saberes para la convivencia pacífica.

Gestionar el conocimiento de forma oportuna e integral en los procesos de toma de decisiones para generar instrumentos de gestión pública y la rendición de cuentas en el ámbito de los objetivos de la política y las competencias institucionales de las entidades involucradas, mediante procesos de integración de información, investigación y reconocimiento de saberes territoriales y comunitarios, lo que permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia, procesos de diálogo ciudadano, rendición de cuentas y mejora continua de los instrumentos de la política y la gestión pública de la convivencia y la seguridad.

2. Gestión territorial de la convivencia y la seguridad.

Fortalecer las capacidades del talento humano, los instrumentos y procesos de gestión de las entidades públicas, de sectores privados, así como organizaciones y comunidades involucradas en la gestión pública de la seguridad y la convivencia, en distintos contextos sectoriales, territoriales y regionales, a través de procesos de formación y facilitación en habilidades blandas y técnicas orientadas al servicio y diálogo ciudadano, la planeación, la gestión y mejora continua de la seguridad y la convivencia en contextos locales y regionales.

3. Cultura de la convivencia e instrumentos para el manejo pacífico de las Controversias.

Impulsar el fortalecimiento de capacidades y habilidades de las comunidades para el reconocimiento y la prevención de conductas que vulneren los derechos, la libertad y la dignidad de las personas, a través del desarrollo de actitudes para la construcción de acuerdos y la implementación de acciones orientadas a la protección de bienes públicos asociados a la seguridad y la convivencia, la transparencia en la gestión pública y el cuidado de la integridad tanto individual como comunitaria.

4. Diálogo social para la transformación de conflictos.

Fortalecer las habilidades y capacidad de las personas, organizaciones públicas y comunitarias, en el reconocimiento y ejercicio activo de sus derechos y libertades, mediante la implementación de procesos de diseño y aplicación participativa, instrumentos y herramientas de formación, facilitación de espacios de diálogo y concertación de acciones para la movilización de recursos, para promover una convivencia armónica basada en el respeto mutuo de los derechos y libertades.

5. Convivencia comunitaria sostenible.

Desarrollar capacidades institucionales, personales y comunitarias fundamentales para la multiplicación de saberes, conocimientos e instrumentos de gestión pública, necesarios en la difusión del conocimiento y el ejercicio de derechos, a través de procesos de formación, diseño de instrumentos de apoyo, conformación de redes de diálogo ciudadano e institucional y la formación a formadores, posibilitando la sostenibilidad de la política mediante la integración de las capacidades de los ciudadanos en la consecución de sus objetivos.

Cabe resaltar que los objetivos específicos se integran a través de acciones de gestión, articuladas en tres ejes transversales (institucional, comunitario y personal), los cuales corresponden a requisitos fundamentales que se deben atender durante los procesos, acciones



y estrategias diseñadas en el marco de la Política Pública de Convivencia y Seguridad para la Vida.

Por su parte, el enfoque institucional se concentra en la articulación y coordinación de las acciones que emprenden las entidades del orden nacional y territorial para propiciar la convivencia y la seguridad humana. El enfoque comunitario centra su atención en los saberes y prácticas mediante las cuales las agrupaciones sociales dirimen diferencias, gestionan y transforman conflictos.

De otro lado, el enfoque personal busca centrar a cada individuo como constructor de la convivencia, puesto que es el principal actor de la concordia y bienestar cotidianos.



Fuente: Elaboración DSCCG- Min Interior

De esta manera, en el contexto de la Política Pública de Convivencia y Seguridad para la Vida, los enfoques poblacionales y diferenciales tienen como propósito visibilizar las necesidades específicas de diversos grupos poblacionales con el propósito de generar acciones que atiendan las particularidades, previniendo la exclusión y la discriminación.

En este sentido, para la presente política pública, el enfoque diferencial se entiende como un marco conceptual y metodológico que busca abordar las desigualdades promoviendo la igualdad de oportunidades mediante acciones específicas dirigidas a grupos históricamente marginados y discriminados; este enfoque se orienta a garantizar el ejercicio pleno de derechos, la protección integral de diversos grupos poblacionales, incluyendo niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y diversidad física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, gitanos, ROM, diversidades de género y diversidades sexuales y la prevención de escenarios que atenten contra la convivencia pacífica y armónica de las comunidades.

A continuación, se presentan las diversas aristas del enfoque diferencial:

Enfoque diferencial para pueblos indígenas

En Colombia, conforme a las cifras aportadas por el DANE (2018), bajo la aplicación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se logró identificar un total de 1.905.617 personas que se autoreconocen como indígenas, con un aumento del 36,8% de acuerdo con el censo general



del año 2005; así, la participación de la población indígena en el total de población nacional es del 4,4% con un aumento de 1 punto porcentual respecto al censo general del año 2005.

• **Enfoque étnico pueblos NARP, RROM y minorías**

El enfoque diferencial étnico de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la Vida reconoce las particularidades, experiencias y desafíos que enfrentan los grupos étnicos afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros, RROM y Minorías en materia de seguridad y convivencia en la territorios y comunidades. Este enfoque se fundamenta en la necesidad de abordar las inequidades históricas y estructurales que afectan a estas comunidades, así como en promover la igualdad de oportunidades, la justicia social y el respeto a la diversidad cultural.

• **Enfoque de género**

El género se puede entender como una construcción social basada en diferencias sexuales, asignando representaciones y valoraciones a lo femenino y lo masculino, y estructurándose sobre la distribución desigual de recursos, poder y subordinación femenina.

Desde este enfoque, se evidencian desigualdades entre hombres y mujeres, así como entre diversas expresiones de masculinidad y feminidad, lo que facilita la interpretación de diferencias y discriminación, proporcionando un análisis sobre la distribución del poder.

• **Enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), población LGBTIQ+ y mujeres.**

Las violaciones de derechos humanos contra personas LGBTIQ+ y con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD) en Colombia son una realidad que demanda el abordaje, prevención y reacción por parte de las instituciones de carácter territorial y nacional; estos actos de violencia no solo persisten, sino que también parecen estar arraigados a problemas subyacentes con la seguridad y la convivencia ciudadana por lo que es esencial reconocer la necesidad urgente de visibilizar estas violencias y de promover acciones afirmativas para prevenirlas, combatirlas, reducirlas y mitigar sus afectaciones.

• **Enfoque para personas con discapacidad.**

La atención a la diversidad dentro de la población con discapacidad es un imperativo que exige un enfoque diferencial, dinámico y adaptable a las diversas realidades y necesidades presentes en cada individuo y comunidad. Este enfoque no solo reconoce las múltiples dimensiones de la diversidad, como lo son el género, la edad, la pertenencia étnica y la situación socioeconómica, sino que también considera las circunstancias específicas de vulnerabilidad, como el conflicto armado, las emergencias y los desastres.

Desde este prisma se concibe la discapacidad no como una condición estática, sino como una interacción compleja entre las deficiencias individuales y las barreras contextuales que pueden limitar la participación plena y efectiva en la sociedad. Es por lo que la adopción del enfoque diferencial en discapacidad implica no solo reconocer esta interacción, sino también comprometerse con la transformación de lo público, el acceso a la justicia, la participación política y pública, así como el desarrollo de la capacidad, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas con discapacidad.

• **Enfoque para las víctimas del conflicto armado**



El artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 define como víctimas del conflicto armado a aquellas personas que han sufrido daños a partir del 1º de enero de 1985, como resultado de violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a normas internacionales de Derechos Humanos. Estas víctimas requieren atención diferencial por parte del Estado para restablecer sus derechos.

Sin embargo, el concepto de víctima no se limita a un período específico o circunstancias particulares, sino que abarca cualquier persona que sufra un daño por acción u omisión de otro individuo o fuerza mayor. En este sentido, diversas experiencias históricas, sociales, culturales, económicas, políticas y territoriales han generado víctimas, lo que resalta la necesidad de acciones adicionales a las propuestas en la ley para dignificar e incluir a estas personas.

Enfoque de curso de vida

El enfoque poblacional para el curso de vida de esta política pública se centra en la prevención, atención y control de situaciones de riesgo que vulneren o amenacen a la población en todas sus etapas y de manera diferenciada, según la función de los ciclos vitales y generacionales. Propende atender las necesidades, características, modos y costumbres de las personas en cada etapa por grupo etario (infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez).

Lo anterior, entendiendo la complejidad de las relaciones sociales y reconociendo desde la diferencia la importancia de abordar las conflictividades a partir de las particularidades propias de las etapas de los involucrados, en un contexto variable. Adicionalmente, esta política utiliza algunos datos estadísticos por rangos de edad para tener una comprensión de los fenómenos desde las características de los grupos etarios para diseñar acciones orientadas a cada etapa del ciclo de vida.

Enfoque territorial

El enfoque territorial de esta política pública implica tener en cuenta las particularidades y retos específicos que enfrenta cada comunidad, partiendo de que no existen territorios homogéneos, ya que las necesidades y contextos locales varían significativamente. En consecuencia, cada territorio presenta características únicas que influyen en sus necesidades, dinámicas sociales, diversidad y origen cultural, estatus migratorio, así como desafíos específicos de convivencia y seguridad.

Enfoque interseccional

Los anteriores enfoques mencionados evidencian que la Política Pública de Convivencia y Seguridad para la Vida comprende que en Colombia existe la convergencia de múltiples características diferenciales de las personas (pertenencia étnica, identidades de género, orientaciones sexuales, etapa del ciclo vital y ubicación territorial, entre otras), que producen experiencias sustantivamente diferentes entre los sujetos. Mas aún, reconoce que la interrelación, intersección o superposición de dichas identidades en un contexto histórico, social, económico y cultural determinado pueden incrementar las situaciones de desventaja, vulnerabilidad, desigualdad y discriminación.

¿Cuáles son las metas plurianuales y anuales para cada una de las vigencias?

A partir de la información suministrada por la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, así como el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción del Ministerio del Interior, se presentan las metas plurianuales y anuales de la vigencia 2024 para la Dirección citada, así como las actividades previstas para el cuatrienio.



Así pues, la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno cuenta con cuatro iniciativas, como se muestra a continuación:

Meta 2023-2026	Actividades 2023-2026
Formulación e implementación de la política pública de convivencia y seguridad para la vida	Formular instrumentos de política normativos y técnicos que permitan la articulación de la gestión para la convivencia y seguridad en el territorio Nacional.
	Realizar asistencias técnicas a las entidades territoriales en temas relacionados con la gestión territorial de la convivencia y seguridad ciudadana.
	Implementar estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia en el marco de la seguridad humana.
Creación del sistema nacional de convivencia para la vida	Mejorar la gestión de la información referente a la convivencia y seguridad entre actores territoriales nacionales e interinstitucionales.
	Crear mecanismos de articulación, coordinación, atención y seguimiento de las conflictividades sociales en el marco de la seguridad humana en el territorio.
	Implementar el sistema de información en su componente de infraestructura técnica, tecnológica y de arquitectura institucional, que permita elaborar informes de monitoreo territorial.
Atender y hacer seguimiento al 100% de las alertas emitidas por la defensoría del pueblo y mejorar el proceso.	Atender y hacer seguimiento a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas – CIPRAT, de conformidad con el Decreto 2124 de 2017.
	Fortalecer las capacidades de las entidades concernidas para mejorar la formulación de los planes de acción orientados al cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas.
Consolidar la descentralización política y administrativa, que permita fortalecer el desarrollo regional, la convivencia y la seguridad local, a través de la cooperación entre entidades territoriales y la nación para el desarrollo de la gobernanza local, alrededor del agua y la justicia ambiental	Articular las acciones interinstitucionales para fortalecer la Gobernanza de las entidades territoriales, el orden público, la seguridad y convivencia ciudadana, especialmente en los departamentos y municipios fronterizos.
	Asistir a las entidades territoriales en el fortalecimiento de la política pública de Descentralización para garantizar la competitividad territorial y el desarrollo regional que les permitan actualizar los procesos de planificación y ordenamiento del territorio.

Fuente: Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción del Ministerio del Interior.



¿Cuáles son los objetivos para vigencia 2024 y a la fecha que avance existe en cumplimiento de estos objetivos?

De acuerdo con el seguimiento del **I trimestre 2024** del Plan Estratégico Institucional y del Acción 2024 del Ministerio del Interior, la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno presenta el siguiente avance con relación a los objetivos planteados para esta vigencia:

INICIATIVAS			ACTIVIDADES		
% PROGRAMADO	% AVANCE	REZAGO INICIATIVAS	% PROGRAMADO	% AVANCE	REZAGO ACTIVIDADES
17,70%	14,60%	3,10%	19,60%	11,00%	8,60%

Fuente: Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno – Ministerio del Interior.

2- De conformidad con la ley, su cartera es la encargada de las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, de acuerdo a ello, sírvase informar:

¿Qué acciones y políticas han sido implementadas en el territorio para la vigencia 2023 y 2024?

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Derechos Humanos, se precisa que el Ministerio del Interior, a través del equipo de Gestión Preventiva del Riesgo, llevó a cabo acciones y políticas durante la vigencia 2023 y 2024, las cuales fueron implementadas en el territorio tal y como se muestra a continuación:

El proyecto de Inversión denominado “*Fortalecimiento de la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades en Colombia*”, con código BPIN2021011000083, cuyo objetivo general es “*Mejorar el nivel de respuesta de las entidades territoriales y organizaciones en las medidas frente a las amenazas, vulnerabilidades y las eventuales consecuencias de violaciones de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad*”; en las vigencias 2023 y 2024 se han desarrollado las siguientes acciones con relación a las preguntas realizadas:

Acciones	Meta 2023	Actividades desarrolladas	Meta 2024	Actividades desarrolladas
1. Capacitar en identificación y prevención del riesgo a organizaciones sociales y sujetos de especial protección constitucional, estamos aún a la espera de coordinación para la realización de los diplomados.	14	Pendiente la suscripción del convenio para la ejecución de los diplomados.	14	Pendiente la suscripción del convenio para la ejecución de los diplomados.
2. Capacitar en identificación del riesgo	420	Se realizaron 11 jornadas de capacitación, en las	520	a) Se recolectan los insumos para hacer la priorización de los



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
 Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
 Anexos: 0
 Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
 Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS

asociado a servidores y funcionarios públicos		siguientes entidades territoriales: Nariño, Putumayo, Magdalena, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Sur de Bolívar, Magdalena Medio y Montes de María, Antioquia, Popayán, Chocó y Tumaco.		municipios a intervenir, y se focalizan los municipios a intervenir. b) A la espera de la viabilidad del operador logístico.
3. Formular el Plan de Acción de la Política Nacional de prevención de violaciones de derechos humanos.	1	Documento final "Plan de Acción de la Política nacional de prevención de violaciones de Derechos Humanos e infracciones del DIH"	1	Se tiene previsto desarrollar 4 jornadas de trabajo, una vez esté en marcha el operador logístico.
4. Formular el Plan de Acción para la Instancia de prevención Subcomité Territorial de Prevención Protección Garantía de No Repetición.	138	Se acompañaron en la formulación de los Planes de Acción en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Nariño y Valle del Cauca.	220	a) Se recolectan los insumos para hacer la priorización de los municipios a intervenir, y se concluye la focalización (ver lista de municipios) b) A la espera de la viabilidad del operador logístico.
5. Apoyar a las entidades territoriales en la formulación y/o actualización Planes Integrales de prevención a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.	138	Se acompañaron en la formulación y/o actualización de los Planes Integrales de prevención a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en los siguientes	220	a) Se recolectan los insumos para hacer la priorización de los municipios a intervenir, y se concluye la focalización (ver lista de municipios) b) A la espera de la viabilidad del operador logístico.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
 Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
 Anexos: 0
 Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
 Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS

		departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Nariño y Valle del Cauca.		
6. Acompañar a las entidades territoriales en la formulación del Plan de Acción de la Política nacional de prevención de violaciones de Derechos Humanos e infracción del DIH	19	Entidades territoriales acompañadas en la formulación del Plan de Acción así: Norte de Santander: Salazar de las Palmas, San Cayetano, Arboledas, Cúcuta, El Zulia, Herrán, Labateca, Santiago, Durania, Los Patios, Ragonvalia y la Gobernación. Cundinamarca: Tocancipá, La Palma, La Calera, Facatativá, San Juan de Río Seco, Subachoque y la Gobernación.	5	Dos (2) documentos metodológicos en diseño y diagramación.
7. Formular y diseñar documentos metodológicos en Gestión Preventiva del Riesgo.	10	a) Documentos de apoyo que requiere la comunidad para disminuir el riesgo en sus comunidades. b) Documentos metodológicos para implementar la Gestión Preventiva del Riesgo en los territorios.	5	Dos (2) documentos metodológicos en diseño y diagramación.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
 Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
 Anexos: 0
 Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
 Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS

8. Evaluar la implementación de Gestión en el Territorio.	1	Informe de resultados producto de la aplicación de la metodología para la evaluación de resultados.	1	Pendiente la contratación del profesional especializado.
9. Asesorar a las entidades territoriales en la implementación del Modelo de gestión preventiva del riesgo.	138	Se asesoraron en fortalecimiento institucional, coordinación y articulación, las siguientes entidades territoriales: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Nariño y Valle del Cauca.	220	a) Se recolectan los insumos para hacer la priorización de los municipios a intervenir, y se concluye la focalización (ver lista de municipios) b) A la espera de la viabilidad del operador logístico.
10. Acompañar a entidades territoriales, Organizaciones sociales y comunidades en la atención de hechos victimizante que se materializaron.	138	Elaboración, diseño y diagramación de Rutas de prevención y protección a líderes y defensores de los derechos humanos en las siguientes entidades territoriales: Ovejas – Sucre, Granada y Vistahermosa – Meta, Bolívar, Caldas, Risaralda, Magdalena, Valle del Cauca, y rutas de atención para diferentes Organizaciones Sociales.	220	a) Se recolectan los insumos para hacer la priorización de los municipios a intervenir, y se concluye la focalización (ver lista de municipios) b) A la espera de la viabilidad del operador logístico.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
 Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
 Anexos: 0
 Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
 Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS

11. Cofinanciar iniciativas focalizadas en Planes de Prevención.		Las iniciativas están en estudio y evaluación del Comité.		Las iniciativas están en estudio y evaluación del Comité.
12. Formular el plan de acción de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización.	1	Se cuenta con el Plan de Acción y se envió a las instituciones para reporte de sus acciones.	1	Reunión de articulación entre el Ministerio del Interior, FICONPAZ y la Unidad de Implementación; se llegaron a los siguientes acuerdos: (25-04-2024) - Revisar el estado de avance para consolidar la matriz definitiva y convocar a las entidades para la revisión de las líneas, compromisos a seguir y posterior aprobación del plan operativo. - Revisar las memorias que quedaron de los 10 encuentros regionales de paz del año pasado, así como también traer al proceso a la mesa de excombatientes. - Priorizar alcaldías en donde se haya avanzado en el trabajo previo. - Priorizar organización que hayan realizado acciones de reconciliación.
13. Territorializar la política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización en territorios priorizados.	32	La territorialización de la política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización, se hizo los 32 departamentos a través de la campaña denominada <i>Paz Sin Estigmas</i> , a través de señal Colombia y canal institucional RTVC.	32	Se elabora cronograma de trabajo para la territorialización de la política a partir del mes de junio, una vez se disponga del operador logístico.

Fuente: Dirección de Derechos Humanos – Ministerio del Interior.

Al respecto, se resalta que, por parte del Equipo de Defensoras y Defensores, durante la vigencia 2023 y 2024, se ha avanzado en las siguientes acciones:



1) **Construcción de planes de acción para Zonas Especiales de Garantía:** Se han elaborado planes de acción en clave de prevención, protección y reconocimiento a la labor de defensa de los derechos humanos en departamentos prioritarios como Cauca, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Chocó, la región del Magdalena Medio y la subregión de Montes de María. Estos planes surgen de un diálogo participativo con personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, así como sus organizaciones. Se han establecido medidas específicas para más de 40 municipios pertenecientes a las 16 subregiones PDET, incluyendo:

- Antioquia: región bajo cauca antioqueño.
- Arauca: Arauca, Arauquita, Tame, Fortúl, Saravena, Cravo Norte y Porto Rondón.
- Subregión Montes de María.
- Región de Magdalena Medio.
- Cauca: Buenos Aires, Caldon, Suarez, Santander de Quilichao, Argelia, Guapi y Toribio.
- Caquetá: San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquies, San José de la Fragua, Florencia, Paujil y Curillo.
- Nariño: Magüí Payán, Mosquera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Olaya Herrera, El charco, Barbacoas, Tumaco.
- Valle del Cauca: Buenaventura.
- Chocó.

2) **Establecimiento de pactos ciudadanos:** Se han establecido pactos ciudadanos en municipios estratégicos como Santander de Quilichao (Cauca), municipios costeros de Nariño, Arauca, la Subregión de Montes de María y Caucasia (Antioquia), promoviendo el respeto y apoyo a la labor de defensa de los derechos humanos mediante procesos participativos y deliberativos.

3) **Implementación de estrategia de autocuidado y autoprotección:** Se han realizado talleres de autoprotección y autocuidado en departamentos como Cauca y Nariño, fortaleciendo las capacidades individuales, familiares y organizativas de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales.

4) **Encuentros zonas PDET para la actualización de la Política Pública Nacional LGBTIQ+:** Se realizaron escenarios de diálogo e interlocución de lideresas y líderes del movimiento social LGBTIQ+ en el Pacífico Nariñense, Montes de María, Magdalena Medio y Bajo Cauca Antioqueño con la finalidad de recoger insumos que contribuyeran a la identificación de líneas estratégicas en la protección y la garantía de derechos con enfoque diferencial desde perspectivas analíticas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

5) Además, se estableció el Proceso de Concertación de la Política Pública Integral de Garantías, cuyo objetivo es propiciar una amplia deliberación social y política para construir, adoptar, implementar y supervisar una política pública integral de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Hasta la fecha, se han adelantado seis encuentros regionales de consulta para recoger insumos y construir esta política pública, los cuales se han llevado a cabo en Barranquilla, Barrancabermeja, Pitalito y Guapi. Asimismo, se realizaron mesas de trabajo con entidades nacionales para identificar retos y posibles acciones institucionales para implementar esta política pública. Por último, se realizó la búsqueda, análisis y sistematización de fuentes secundarias para la estructuración del diagnóstico.

6) Finalmente, se ha brindado acompañamiento técnico a las Mesas Territoriales de Garantías del Atlántico, Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Nariño, Norte de Santander, Santander y Sucre.



Por otra parte, se resalta que el componente LGBTI de la Dirección de Derechos Humanos de esta Cartera ministerial efectuó las siguientes actividades:

FICHA TÉCNICA ACTIVIDADES 2023		
Fuente de financiamiento: Cinco actividades dentro del Proyecto de Inversión “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL”		
Cod. Rubro C-3701-1000-20		
Descripción de la actividad	Total	Enlace para descargar
Elaborar documento balance ejecución Plan de Acción Política Pública LGBTI y orientaciones para territorialización Decreto 762 de 2018.	1	https://drive.google.com/file/d/1XA0x6r9GOskE6j3xaXtO9WXsK3IUYuXu/view
Asistir técnicamente a las entidades territoriales para la incorporación del plan de acción de la política pública LGBTI en los instrumentos de gestión territorial.	78	https://drive.google.com/drive/folders/1616n8YYQ2v1fQIPn6rBBpW9Hv9C2319Q
Asistir técnicamente a los actores sociales LGBTI en la exigibilidad de derechos.	14	https://drive.google.com/drive/folders/1KjelkiFa58oA82IMP0Zng317pSqAvLxa
Realizar espacios de participación de sectores LGBTI en las mesas temáticas del Decreto 762 de 2018.	18	https://drive.google.com/drive/folders/1fkixgnzW8dqaJOa8Dd7gw4V2hN7pWGqP

En relación con las asistencias técnicas, en cada departamento, distrito y municipio se incorporaron las siguientes acciones:

1. Fortalecer técnicamente a las entidades territoriales sobre normatividad, marcos conceptuales, documentos técnicos e instrumentos de política sobre identidades y derechos LGBTI-OSIEGD; para ello, previamente se realizó rastreo documental.
2. Se generaron procesos de identificación de necesidades, revisión de documentación territorial y mapeo institucional que permitiera realizar encuadre técnico sobre el estado de la institucionalización de marcos de derechos e instrumentos de la política LGBTI-OSIEGD.
3. Mapeo y encuentros con actores sociales incidentes en el territorio que permitieron contrastar fuentes de información frente a la gestión pública para la garantía plena de Derechos Humanos LGBTI-OSIEGD.
4. Armonización de la demanda de asistencia técnica de las entidades territoriales con las necesidades públicas identificadas con los sectores sociales.



5. De acuerdo al proceso de fortalecimiento, identificación y armonización se tomó como referente el documento técnico de Mecanismos para la garantía de derechos de los sectores sociales LGBTI y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a nivel territorial del Ministerio del Interior, el Documento de Consideraciones para formular políticas públicas territoriales LGBTI publicado por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, así como la bibliografía sobre diversidad sexual ancestral, ya que los documentos de formulación de política LGBTI-OSIEGD están fundamentados en las nociones occidentales de la sexualidad.

Por otra parte, se destaca la construcción del Balance del Plan de Acción 2020-2022 de la Política Nacional LGBTI, que consolidó los instrumentos de política de los territorios e incluyó los acompañantes del Ministerio del Interior en el 2023, entre ellos, Política de Barrancabermeja, Política Mitú, Política de Vaupés y Política del Cauca.

Para la vigencia 2024, las acciones propuestas desde el componente LGBTI de la Dirección de Derechos Humanos son:

- Acompañar técnicamente las instancias de coordinación y articulación de la política pública LGBTIQ+ del orden nacional (10 encuentros): se han realizado dos sesiones de la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI y se encuentra agendamiento para las demás sesiones mensuales de la vigencia 2024, el 30 de mayo se desarrolló la primera sesión del Grupo Técnico de la Política Nacional LGBTI, en junio se retomaron las Mesas Temáticas de la Política. Así mismo, el 19 de junio se entregó documento de Plan de Acción Transitorio LGBTI por parte del Ministerio del Interior.
- Realizar espacios de participación de sectores LGBTIQ+ a nivel nacional y territorial (7 encuentros). En articulación con la GIZ se desarrollaron tres encuentros de participación LGBTIQ+ en Villavicencio/Meta, Florencia/Caquetá y Cúcuta/Norte de Santander.
- Realizar espacios de formulación de planes de autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTIQ+ en los territorios (32 planes). Se realizó articulación con Caribe Afirmativo, contando actualmente con lineamientos para la formulación de estos planes.
- Cofinanciar iniciativas de autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTIQ+, en el marco de los planes de autoprotección territorial (23 iniciativas) - A finales del mes de junio se realiza la segunda convocatoria del Banco de Proyectos que tendrá líneas asociadas a iniciativas de autoprotección desde el enfoque de género y diversidad sexual.

Sumado a lo anterior, este Ministerio, a través del equipo de Protección Colectiva, llevó a cabo las siguientes acciones y políticas durante la vigencia 2023 y 2024, las cuales fueron implementadas en el territorio, tal y como se muestra a continuación:

De acuerdo con las competencias establecidas en el artículo 2.4.1.5.6 del Decreto 2078 de 2017, por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015 y el artículo 23 del Decreto 1139 de 2021, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento periódico a la oportunidad, idoneidad y eficacia de la implementación de medidas de protección colectiva aprobadas en el marco del CERREM y registradas en Acto Administrativo.

Se definió una metodología interna de seguimiento que permite como resultado final un informe que recoge el estado actualizado de las medidas de protección colectivas implementadas y un análisis cualitativo del proceso. Para el seguimiento, se oficia a las entidades responsables y



registradas en cada acto administrativo para reportar las gestiones de avance sobre la implementación de las medidas de protección colectiva a su cargo. De igual modo, se realizan reuniones virtuales y presenciales de seguimiento con los representantes y autoridades del colectivo beneficiario para recopilar las percepciones, avances, dificultades, y lo que consideren sobre la implementación de las medidas de protección colectiva aprobadas a su favor.

Surtido lo anterior, se proyectan los informes de seguimiento y se hace remisión formal de los mismos a la secretaría técnica del CERREM Colectivo.

Para el año 2023 se logró avanzar con el cumplimiento de lo dispuesto en la norma con la implementación de la etapa de seguimiento dentro de la ruta de protección colectiva. Los logros en el 2023 fueron los siguientes:

- Se conformó el equipo de seguimiento a la implementación de medidas de protección colectivas.
- Se reactivó la presentación de informes de seguimiento en el marco del CERREM Colectivo.
- Se han actualizado seguimientos pendientes desde el año 2021 y 2022.
- Para identificar la oportunidad, la idoneidad y la eficacia de las medidas de las medidas de protección colectivas se han tenido en cuenta las voces de los colectivos con la presencia de la Dirección de Derechos Humanos en el territorio.
- Con el apoyo de consultorías en el marco del Proyecto con ACNUR, se inició un ejercicio de análisis al proceso de la implementación de las medidas con un enfoque étnico y de género.
- Se definió una ruta de articulación institucional para los trámites de emergencia colectivos activados desde la remisión de valoraciones iniciales de riesgo de la UNP.

Para la vigencia 2024, se busca realizar la actualización del estado de la implementación de las medidas de protección colectiva de todos los casos registrados desde la entrada en vigor de la ruta de protección colectiva hasta marzo del 2023. También se realizan mesas de impulso y seguimiento a la implementación de las medidas de protección colectiva que, aunque ya están aprobadas, aún están pendientes de implementación.

¿Cuál es la ruta de atención para el cumplimiento de este objetivo?

En relación con la Gestión Preventiva del Riesgo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se tiene que la ruta de atención se establece a través del Proyecto de Inversión denominado *“Fortalecimiento de la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades en Colombia”*, el cual tiene unos recursos asignados para la vigencia 2023 de \$39.312.574.830 y para la vigencia 2024 de \$40.034.612.918, con los cuales se desarrollan las actividades arriba señaladas, y se recolectan los insumos para definir la priorización de los municipios a intervenir por parte del equipo de Gestión Preventiva del Riesgo.

Por parte del equipo de Defensores y Defensoras se observa que, en caso de detectar una situación de riesgo, amenaza y violación de Derechos Humanos contra un defensor, defensora, organización, colectivo y/o comunidad recepcionada por la entidad a través de los diferentes canales institucional, este equipo activa los mecanismos interinstitucionales de acuerdo con la particularidad del caso. Para ello, se realiza un acercamiento inicial con las víctimas, sí lo amerita, posteriormente se compulsa copia a la Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación, Entidad Territorial y demás entidades competentes.

En este apartado es preciso aclarar que la Dirección de Derechos Humanos no cuenta con un proyecto de inversión exclusivo para asuntos LGBTI; en este sentido, las acciones en línea de derechos LGBTI están incorporadas en el Proyecto de Inversión general: *“Fortalecimiento de la*



gestión territorial en la garantía, promoción y goce de los derechos humanos a nivel nacional"; en consecuencia, las acciones citadas en el punto anterior responden al Plan Anual de Acción que permiten establecer rubros específicos para cada una de las acciones, incluidos los costos de funcionamiento del componente.

De igual manera, el componente LGBTI cuenta con un canal de denuncias para las violencias basadas en prejuicio para sectores sociales LGBTI-OSIEGD, los casos son gestionados a través de la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI.

Respecto al Decreto 660 de 2018^[2], se tiene que se reglamentó el programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios, correspondiente al punto 3.4.8 del acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC EP. Este decreto responde al Indicador C-256 y en el marco de los comités técnicos. Así pues, el Ministerio del Interior es el responsable de la secretaria técnica del Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo para territorios rurales.

Durante 2023, el Ministerio del Interior convocó a cinco (5) sesiones del Comité técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección y del protocolo de protección para territorios; en el 2024 una (1) vez. Todas las sesiones se han realizado de manera presencial en la Dirección de Derechos Humanos y un número menor de delegados han participado virtualmente.

En el marco de las sesiones del comité técnico durante la vigencia 2023, se presentaron y aprobaron el reglamento del comité y los instrumentos con los criterios de focalización y priorización para el ingreso de comunidades y organizaciones, en el contexto de la implementación del programa integral. Asimismo, se aprobó la priorización de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) con vocación de permanencia en los territorios. En la sesión del 22 de abril de 2024, se autorizó la apertura de nuevas convocatorias públicas y se estableció que la actualización del Plan Integral de Participación (PIP) se realizará cada cuatro años, salvo en casos de hechos sobrevinientes.

De igual forma, se han mantenido diálogos con entidades competentes y con organizaciones nacionales priorizadas para identificar instancias de concertación y medidas para darle celeridad a la vía de implementación.

Igualmente, se destaca que durante el año 2023, esta Cartera ministerial, por conducto de la Dirección de Derechos Humanos, priorizó y realizó acciones encaminadas a la producción y/o actualización de herramientas pedagógicas, metodológicas y de difusión, orientadas a optimizar la implementación del programa integral, logrando los siguientes resultados:

- Diseño, aprobación en comité técnico e implementación del formato de postulación al Programa.
- Diseño, aprobación en comité técnico e implementación del formato de valoración anual del riesgo para cada organización.
- Diseño, aprobación en comité técnico e implementación de los criterios de priorización y focalización.
- Diseño e implementación del formato para formulación de Planes Integrales de Prevención PIP.
- Diseño e implementación del instrumento para formulación de Protocolos de Protección para Territorios Rurales.
- Cartilla de difusión del Decreto 660 de 2018.

En cuanto a avances relacionados con el *Componente 1. Medidas de prevención, seguridad y protección*, el cual se materializó a través de los Planes Integrales de Prevención a violaciones



de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, a diciembre de 2023, se obtuvieron importantes resultados, como se muestra a continuación:

Formulación y actualización de 40 PIP con organizaciones con arraigo social y territorial en los departamentos de: Cauca, valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Córdoba, Antioquia, Casanare, Caquetá, Nariño, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá.

Adicionalmente y retomando los avances alcanzados en años previos, se recogió el trabajo apoyado por la Defensoría del Pueblo y la ONU Derechos Humanos en el acompañamiento a organizaciones en la construcción de planes de protección y autoprotección, y se continuó el proceso en el paso de la concertación de medidas o el seguimiento a la asociación de Mujeres de Argelia AMAR en el Cauca y Rostros Visibles en Norte de Santander.

Dando continuidad a la implementación del programa integral y en línea con las decisiones tomadas por el comité técnico de los componentes 1 y 3, los días 7 y 8 de marzo del presente año se llevó a cabo un encuentro en la ciudad de Bogotá con delegaciones de siete ETCR priorizados. Este encuentro fue posible gracias a la disposición y apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Defensa, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la misión de verificación de Naciones Unidas. El objetivo del encuentro fue recopilar información para la formulación de los Planes Integrales de Protección.

Actualmente, el equipo encargado de la implementación del Decreto 660 de 2018 está formulando los documentos relativos a los Planes Integrales de Prevención, que se enviarán a las comunidades para revisar y validar la información, y continuar con la ruta de implementación del programa. Los ETCR involucrados son: La Variante en Tumaco, Nariño; Los Monos en Caldon, Cauca; Miravalle en San Vicente del Caguán, Caquetá; Charras en San José del Guaviare; Filipinas en Arauca; El Estrecho en El Patía, Cauca; y Caño Indio en Tibú, Norte de Santander.

Al mes de junio de la presente anualidad, se han avanzado con la formulación de 20 protocolos de protección en territorios rurales para integrar las rutas existentes en los departamentos y municipios donde se ubican los procesos y comunidades afectadas.

Por otro lado, respecto al *apoyo a la capacidad de denuncia*, se resalta que tiene prioridad para el año 2024. Sin embargo, a través del Banco de Proyectos para las Comunidades, convocatoria ciclo II- 2023, la cual fue abierta en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de marzo de la presente anualidad, se dispuso de dos líneas para que las comunidades y organizaciones priorizadas en el marco del *Programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios*, pudieran presentarse a dos líneas específicas, exclusivamente para ellas:

Línea 4: Fortalecer el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y organizaciones en los Territorios. Apoyar iniciativas territoriales como acción de contribución a la implementación de los planes integrales de prevención y autoprotección de comunidades en el marco del decreto 660 de 2018. Exclusiva para organizaciones, comunidades y poblaciones priorizadas en el marco de implementación del Decreto 660 de 2018.

Línea 9: Cofinanciar iniciativas focalizadas en el impulso del programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales, comunidades en el marco del Decreto 660 de 2018. Exclusiva para



organizaciones, comunidades y poblaciones priorizadas en el marco de implementación del Decreto 660 de 2018.

En el marco de esta convocatoria, se ofreció asistencia técnica a todas las organizaciones y comunidades priorizadas, sobre la formulación de los proyectos y los términos de referencia. Es así como 88 iniciativas o proyectos fueron presentados por parte de organizaciones y comunidades priorizadas, 62 a la línea 4 y 26 a la línea 9.

Cerrada la convocatoria, se revisaron los documentos requeridos y se dispuso de un periodo de tiempo para que las organizaciones realizaran subsanaciones y con ello ser evaluadas y calificadas. Actualmente, y en cumplimiento de los términos de referencia, el Ministerio del Interior se encuentra en proceso de verificación y calificación para conocer el resultado final y proceder a la ejecución de los proyectos.

En cuanto a los aspectos pendientes por reglamentar, es pertinente manifestar que para el Ministerio del Interior es importante definir las rutas relacionadas con la implementación del programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios rurales. Por lo anterior, se resaltan los siguientes puntos:

Por una parte, lo concerniente a la priorización de comunidades étnicas, caso que requiere acuerdos con las direcciones correspondientes, pensado en los principios de concurrencia y complementariedad.

- El componente 2, promotores y promotoras comunitarios de paz y convivencia, debe surtir el proceso de reglamentación. Este asunto debe ser resultado de la coordinación y esfuerzo de las entidades que forman parte del Comité Técnico de los componentes 2 y 4, en el que el Ministerio de Justicia tiene un especial. Adicionalmente, se requiere materializar ejercicio integral de convocatoria, priorización y capacitación previo a la acreditación.
- La definición de instancias para la concertación de medidas es otro tema urgente por resolver; no obstante, en la última sesión del Comité Técnico de los componentes 1 y 3, se definió la necesidad establecer diálogos bilaterales con los procesos nacionales.
- Es necesaria la inclusión de las rutas de prevención en los protocolos de protección en territorios rurales, considerando que la responsabilidad como primeros respondientes en materia de prevención y protección recae en los alcaldes y gobernadores, complementando con la acción efectiva del resto de entidades del sistema de garantías.
- Desde la perspectiva de la Dirección de Derechos Humanos de esta Cartera ministerial, el componente 4, avanzará en la medida en que las organizaciones demanden su implementación, pudiendo construir acuerdos a partir de los intereses y experiencias de cada una. Es así como cada caso será particular según el contexto, pese a las similitudes.

En consecuencia, se considera necesario convocar a sesión del Comité Técnico del componente promotores y promotoras comunitarias de paz y convivencia, y el componente apoyo a la capacidad de denuncia, el cual corresponde al escenario natural en el que se toman decisiones al respecto. Se espera lograr acuerdos para tal propósito, ya que no es facultativo del Ministerio del Interior tomar decisiones unilaterales respecto al paso a paso de la implementación, aunque la apuesta y compromiso es irrenunciable. Desde este Ministerio se espera tener definidas estas rutas a más tardar en el segundo semestre del 2025, sin desistir de los desarrollos progresivos al respecto, tal como ha sido a través del compromiso y experiencia de esta Cartera.

De igual forma, se resalta que el diálogo permanente con las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales integrado en el Proceso Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria,



Campesina, Étnica y Popular, ha permitido importantes avances en la implementación del programa; a ello se suma el compromiso y voluntad política de las demás entidades integrantes de las instancias nacionales y el acompañamiento de Naciones Unidas y el ministerio público.

Por último, se destacan como logros importantes el crecimiento de la población beneficiaria de la implementación del programa; a la fecha se cuenta con ciento tres (103) comunidades y organizaciones; a esto se suma la consolidación de un equipo destacado para tal propósito, con destinación presupuestal específica. Sin embargo, la dificultad más grande que existe actualmente es la ausencia de operador para la ejecución de recursos, situación que limita el alcance de los objetivos y el cumplimiento de las metas en la actual vigencia.

Para finalizar, por parte del equipo de Protección Colectiva del Ministerio del Interior, se aclara que, una vez se notifica el acto administrativo de un nuevo caso beneficiario de medidas de protección colectiva, se asigna a un integrante del equipo de protección colectiva y, tras cumplirse el primer período pactado para su implementación, se inicia con el seguimiento a esta.

¿Cuál es el alcance del enfoque territorial para el cumplimiento de este objetivo?

La priorización para la implementación de la Política Pública de Prevención y de Víctimas se focalizó en los departamentos a intervenir, teniendo en cuenta lo siguiente:

- 1) Priorización de municipios de acuerdo con el análisis de la información producto de ejercicios de monitoreo permanente a las situaciones de riesgo, diagnósticos estructurales.
- 2) Listado de municipios con índice de desplazamiento más alto del País.
- 3) Priorizados por el plan de emergencia - asesinatos de líderes y defensores de DDHH.
- 4) Nivel de riesgo de despojo /abandono de tierras.
- 5) Las necesidades de los municipios y distritos contenidas en el Tablero PAT, de conformidad con la medida “Prevención Temprana” y los derechos a la “Vida, integridad, libertad y seguridad”
- 6) Índice alto de Reclutamiento, uso y utilización de NNA.
- 7) Municipios con alertas estructurales y alertas de eminencia, periodos 2021, 2022 y 2023.
- 8) Municipios con riesgo contra firmantes del Acuerdo de Paz.
- 9) Municipios PNIS, Zona ZOMAC – PDET.
- 10) Municipios priorizados por el AICMA.
- 11) Municipios con priorización de la UARIV - MITI (priorización humanitaria, reparaciones).
- 12) Entidades priorizadas por la unidad de implementación.
- 13) Municipios de los autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004: Auto 092 de 2008, Auto 237 del 2008, Auto 251 del 2008, Auto 004 del 2009, Auto 005 de 2009, Auto 006 de 2009, Auto del 18 de mayo de 2010, Auto 112 de 2012, Auto 098 de 2013, Auto 073 de 2014, Auto 098 de 2014, Auto 009 de 2015, Auto 373 de 2016, Auto 620 de 2017, Auto 266 de 2017, 894 - 811 de 2022, en donde la Dirección de Derechos Humanos tiene órdenes específicas en materia de DDHH y prevención.



Dando continuidad a lo expuesto, es menester destacar que el Equipo de Defensoras y Defensores está avanzando en la formulación de un índice de focalización de zonas especiales de protección para la labor de la defensa de Derechos Humanos. Este índice ha cruzado diferentes variables relacionadas con el estado de exigibilidad de derechos y valoración del riesgo suministradas por diversas fuentes, entre ellas: alertas Tempranas; informes de organismos internacionales y nacionales; datos suministrados por entidades gubernamentales sobre homicidios, amenazas y desplazamientos forzado; Mesas Territoriales de Garantías instaladas y Puestos de Mandos Unificados por la Vida acompañados por el Ministerio del Interior; municipios priorizados en el Plan de Emergencia; municipios PDET; ETCR con alto riesgo y vocación de permanencia y traslado; municipios con riesgo de confinamiento/desplazamiento; municipios con planes de prevención formulados y actualizados; y territorios priorizados por el Decreto 660 de 2018 (Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios) y el Programa de Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

Las acciones del componente LGBTI descritas en el primer apartado, son de nivel nacional, toda vez que responden al marco del Decreto 768 del 2028, Política Nacional LGBTI. No obstante, se han definido algunas priorizaciones derivadas de los territorios con Alertas Tempranas, Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado, y PDET, en las que se identifica afectación en derechos a personas LGBTI.

Al respecto el equipo de Protección Colectiva manifiesta que, tal como se mencionó en el procedimiento del seguimiento, el diálogo con las autoridades y los representantes del colectivo beneficiario es vital para construir el informe final del caso. Así, el análisis abordado no contempla una visión institucional de la implementación, sino una visión territorial del cumplimiento estatal.

¿Qué zonas y regiones han sido priorizadas para el cumplimiento de este programa?

Para la vigencia 2023 los territorios priorizados para las acciones realizadas del proyecto fueron los siguientes:

- Antioquia: Anorí, Apartado, Cáceres, Caucasia, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Remedios, Segovia, Tarazá, Yarumal y Yondó.
- Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Tame.
- Atlántico: Barranquilla, Soledad.
- Bolívar: Arenal, Cantagallo, El Carmen De Bolívar, María La Baja, Montecristo, Morales, Norosí, San Pablo, Santa Rosa Del Sur, Simití.
- Departamento de Caldas.
- Departamento de Casanare.
- Caquetá: Cartagena del Chairá, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente del Caguán.
- Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, López De Micay, Santander De Quilichao, Suárez, Timbiquí.
- Cesar: Departamento y municipio de La Paz.
- Chocó: Departamento y municipios de Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen Del Darién, Juradó, Litoral Del San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Riosucio, San José Del Palmar, Sipí.
- Córdoba: El departamento y los municipios de: Montelíbano, Montería, Puerto Libertador, San José de Ure, Tierralta, Valencia.
- Huila: el departamento y el municipio de Algeciras.
- Guaviare: el Departamento y los municipios de: El Retorno, San José del Guaviare, Miraflores.
- La Guajira: el departamento y el municipio de Dibulla.
- Departamento de Guainía:



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS

- Magdalena: el departamento y los municipios de: Ciénaga, Fundación.
- Meta: el departamento y los municipios de: La Macarena, Mesetas, Puerto Gaitán, Uribe, Vistahermosa.
- Nariño Departamento y municipios de: Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara, Los Andes y Llanada.
- Norte de Santander el departamento y los municipios de: Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, Ocaña, Sardinata, San Calixto, Teorama, Tibú.
- Putumayo el departamento y los municipios de: Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez.
- Departamento del Quindío.
- Departamento de Risaralda.
- Santander el departamento y el municipio de Barrancabermeja.
- Sucre departamento y los Municipios de: Ovejas y San Onofre.
- Departamento del Tolima.
- Valle del Cauca departamento y los municipios de: Buenaventura, Dagua y Trujillo.

Para la vigencia 2024, los territorios priorizados para las acciones a realizar del proyecto fueron los siguientes:

- Antioquia departamento y los municipios de: Amalfi, Anorí, Apartadó, Briceño, Cáceres, Carepa., Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Murindó, Mutatá, Nechí, Necoclí, Remedios, San Pedro de Urabá, Segovia, Tarazá, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Vigía del Fuerte, Yarumal, Yondó, Zaragoza.
- Arauca departamento y los municipios de: Arauca, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Tame.
- Atlántico departamento y los municipios de: Barranquilla, Soledad.
- Bolívar: departamento y los municipios de: Achí, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Carmen de Bolívar, María La Baja, Montecristo, Morales, Norosí, Río viejo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Tiquisio, Zambrano.
- Caquetá departamento y los municipios de: Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso.
- Caldas departamento y los municipios de: Río Sucio, Samaná.
- Casanare departamento y los municipios de: Hato Corozal, Sacama.
- Cauca Departamento Y Los Municipios de: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldon, Caloto, Corinto, El Tambo, Guachené, Guapi, Jambaló, López De Micay, Mercaderes, Miranda, Morales, Páez, Patía, Piamonte, Piendamó, Puerto Tejada, Rosas, Santander De Quilichao, Silvia, Suárez, Timbiquí, Toribio.
- Cesar departamento y los municipios de: Agustín Codazzi, Becerril, Chimichagua, El Copey, La Paz, Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, San Diego.
- Valledupar.
- Chocó departamento y los municipios de: Acandí, Alto Baudó, Bahía Solano, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Cantón De San Pablo, Carmen Del Darién, Certegui, Condoto, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Río Quito, Riosucio, San José Del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía.
- Córdoba departamento y los municipios de: Montelíbano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San José de Ure, Tierralta, Valencia.
- Huila departamento y los municipios de: Algeciras, La Plata, Neiva.
- Guaviare departamento y los municipios de: Calamar, El Retorno, San José del Guaviare, Miraflores.
- La Guajira departamento y los municipios de: Dibulla, Fonseca, Maicao, Riohacha, Villanueva.
- Guainía departamento y el municipio de: Inírida.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS

- Magdalena: (4) Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta.
- Meta: (10) El Castillo, La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, Uribe, Villavicencio, Vistahermosa.
- Nariño: (21) Barbacoas, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, Ipiales, La Tola, La Llanada, Leiva, Los Andes, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara.
- Norte De Santander Departamento Y Los Municipios De: Abrego, Bucarasica, Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, Ocaña, Sardinata, San Calixto, Teorama, Tibú, Villa Del Rosario.
- Putumayo departamento y los municipios de: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuéz, Villagarzón.
- Risaralda departamento y los municipios de: Pereira, Pueblo Rico.
- Santander departamento y los municipios de: Barrancabermeja, Rionegro.
- Sucre departamento y los municipios de: Chalán, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Onofre, Sincelejo, Tolú Viejo.
- Tolima departamento y los municipios de: Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco
- Valle del Cauca departamento y los municipios de: Bolívar, Buenaventura, Dagua, Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera

Las zonas y regiones priorizadas desde la vigencia 2023, por parte del equipo de Defensores y Defensoras, se relacionan con las zonas de especial protección para la defensa de Derechos Humanos relacionadas con la pregunta anterior.

Entidades territorios PDET y ZOMAC y Sistema de Alertas Tempranas:

Número de Alerta	Departamento (s)	Municipio (s)
Alerta N° 001-22	Valle del Cauca	Cali
Alerta N° 002-22	Putumayo	Puerto Leguizamo
Alerta N° 013-22	Antioquia	Fredonia y Venecia
Alerta N° 014-22	César	Pailitas
Alerta N° 018-22	Cauca	Puerto Tejada
Alerta N° 023-22	Antioquia	Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí
Alerta N° 027-22	Antioquia y Santander	Yondó, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Simacota
Alerta N° 028-22	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	San Andrés y Providencia
Alerta N° 029-22	Atlántico	Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Repelón y Sabanagrande
Alerta N° 033-22	Bolívar y Sucre	Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano, Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San José de Toluviéjo, San Onofre y Sincelejo



Es necesario mencionar que la ruta de protección colectiva funciona por demanda, lo que quiere decir que ninguna zona del país es priorizada, sino que por derecho adquirido los colectivos pueden presentar su solicitud de ingreso a la ruta de protección colectiva, que luego del estudio de riesgo realizado por la UNP y la aprobación de medidas por parte del CERREM, lo que permite a la Dirección de Derechos Humanos realizar el seguimiento a la implementación de las medidas colectivas.

3- Teniendo en cuenta que esta cartera es la responsable de la seguridad y convivencia ciudadana, sírvase de informar las cifras de los últimos 3 años para los siguientes delitos: Abigeato, amenazas, delitos sexuales, extorsión, homicidio, hurto a personas, hurto a residencias, hurto de automotores, hurto de motocicletas, hurto a entidades comerciales, hurto a entidades financieras, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Por competencia y a efectos de que se dé respuesta al interrogante formulado, esta Cartera realizó traslado a la Fiscalía General de la Nación a través de oficio con Radicado No. 2024-2-003201-020344, para que se brinde respuesta de fondo.

4- Su cartera tiene a cargo el fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON, sírvase de indicar:

¿Cuáles fueron los recursos asignados a este fondo para la vigencia 2022?

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para la vigencia 2022, los recursos apropiados fueron por valor total de \$ 449.713.999.244. (Ver Anexo 1 detalle por rubro).

¿Qué porcentaje fue apropiado? Sírvase de discriminar por departamento y municipio con el valor de la inversión.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para esta vigencia se comprometió el 56%. (Ver Anexo 2, compromisos 2022 por departamento y Municipio)

¿Cuáles fueron los recursos asignados a este fondo para la vigencia 2023?

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para la vigencia 2023, los recursos apropiados fueron por valor total de \$ 441.720.927.387. (Ver Anexo 3 detalle por rubro).

¿Qué porcentaje fue apropiado? Sírvase de discriminar por departamento y municipio con el valor de la inversión.

A partir de la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, se aporta documentos Excel, que contiene los compromisos 2023 por departamento y Municipio. (Ver Anexo 4, compromisos 2023 por departamento y Municipio)

¿Cuáles fueron los recursos asignados a este fondo para la vigencia 2024?



De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para la vigencia 2024, los recursos apropiados fueron por valor total de \$ 449.713.999.244. (Ver Anexo 5 detalle por rubro).

¿A la fecha qué porcentaje ha sido apropiado? Sírvase de discriminar por departamento y municipio con el valor de la inversión.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, con corte al 8 de mayo de 2024, para esta vigencia se comprometió el 56%. (Ver Anexo 6, detalle de compromisos 2024 por departamento y Municipio)

5- Uno de los programas de mayor impacto para atacar los delitos señalados en las preguntas previas es el fortalecimiento de los sistemas integrados de emergencia y seguridad SIES, sírvase de indicar:

¿Cuáles fueron los recursos asignados al cumplimiento de este programa para la vigencia 2022? ¿Qué porcentaje fue apropiado? Sírvase de discriminar por departamento y municipio con el valor de la inversión.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para esta vigencia se comprometió el 100%. (Ver Anexo 7 detalle compromisos por departamento y municipio vigencia 2022.)

¿Cuáles fueron los recursos asignados al cumplimiento de este programa para la vigencia 2023? ¿Qué porcentaje fue apropiado? Sírvase de discriminar por departamento y municipio con el valor de la inversión.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para esta vigencia se comprometió el 83%. (Ver Anexo 8 detalle compromisos por departamento y municipio vigencia 2023.)

¿Cuáles fueron los recursos asignados al cumplimiento de este programa para la vigencia 2024? ¿A la fecha qué porcentaje ha sido apropiado? Sírvase de discriminar por departamento y municipio con el valor de la inversión.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, a corte de mayo, para esta vigencia se comprometió el 42%. (Ver Anexo 9 detalle compromisos por departamento y municipio vigencia 2024.)

6- ¿Qué acciones de protección a líderes sociales y ambientales plantea esta cartera, para garantizar la vida, dignidad y democracia?

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Derechos Humanos, se precisa que en el marco de la formulación de la Política Pública Integral de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia se ha impulsado un proceso de consulta participativa para la identificación de propuestas encaminadas a garantizar la labor adelantadas por personas defensoras en sus diferentes ámbitos de incidencias.

No obstante, cabe destacar que el Ministerio del Interior avanzó en la formulación y la implementación del Plan de emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes de paz. Este plan fue elaborado por las plataformas de derechos humanos (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza



de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma DESC), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y el Programa Somos Defensores, con la participación de congresistas de la coalición del Pacto Histórico (Iván Cepeda Castro, Jahel Quiroga, Aida Avella, Aida Quilcue, Isabel Zuleta, Gloria Flórez, y Alirio Uribe) y del Partido Comunes (Pablo Catatumbo), con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en consulta con la Misión de la ONU en Colombia. De igual manera, este plan recogió los aportes recibidos por parte de organizaciones en los territorios, grupos étnicos y de mujeres.

Este Plan de Emergencia se contempló con una periodicidad determinada (2022 al 2023) y una priorización territorial, con un enfoque prioritario de prevención y protección urgente, de forma que se previó un plan de intervención rápida y oportuna en el que se articulen el Estado, las organizaciones sociales y la comunidad internacional.

Por último, cabe destacar que el Ministerio del Interior tiene programado, para el segundo semestre del 2024, validar, aprobar y adoptar la Política Pública Integral de Garantías de la Labor de Defensa de Derechos Humanos y su plan de atención integral como instrumento de planeación estratégica para la operativización de la política pública de garantías.

Respetada Secretaria, en los anteriores términos, este Ministerio, en aras de garantizar una respuesta eficaz y de fondo, da por resueltos los interrogantes planteados y se suscribe atento a cualquier requerimiento que en función de la labor congresional se solicite a esta cartera.

Cordialmente,



KEVIN FERNANDO HENA O MARTINEZ
Director Técnico
Dirección de Asuntos Legislativos
Despacho del Viceministro General del Interior

Proyectó: Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno; Dirección de Derechos Humanos; Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial y Lucha contra la Trata; Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana; y la Oficina Asesora de Planeación

Consolidó y Revisó: Manuel Felipe Díaz Chicuasque – Contratista DAL

Revisó: Nicolas Rojas - Contratista DAL

Anexos:

- ANEXO 1_APROPIACION 2022
- ANEXO 2_COMPROMISOS DEPARTAMENTO y MUNICIPIO 2022
- ANEXO 3_APROPIACION 2023
- ANEXO 4_COMPROMISOS DEPARTAMENTO y MUNICIPIO 2023
- ANEXO 5_APROPIACION 2024
- ANEXO 6_COMPROMISOS DEPARTAMENTO y MUNICIPIO 2024
- ANEXO 7_COMPROMISOS DEPARTAMENTO y MUNICIPIO 2022_SIES
- ANEXO 8_COMPROMISOS DEPARTAMENTO y MUNICIPIO 2023_SIES
- ANEXO 9_COMPROMISOS DEPARTAMENTO y MUNICIPIO 2024_SIES

[1] **Ley 2272 de 2022.** Por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones.

[2] **Decreto 660 de 2018.** Por el cual se adiciona el **Capítulo 7**, del **Título 1**, de la **Parte 4**, del **Libro 2** del **Decreto 1066 de 2015**, Único **Reglamentario del Sector Administrativo del Interior**, para crear y reglamentar el **Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios**; y se dictan otras disposiciones



Al contestar cite Radicado 2024-2-003201-035035 Id: 371283
Folios: 29 Fecha: 2024-07-22 17:55:32
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
Destinatario: AMPAR YANETH CALDERON PERDOMO y OTROS